



elordenmundial.com

El «cesarismo democrático» de Bukele

Recibido: 20/06/2023

Aceptado: 28/06/2023

Publicado: 01/07/2023

Cristhians Manolo Castillo

Licenciado en Relaciones Internacionales de la USAC. Encargado del Área Sociopolítica del IPNUSAC

Correo: crisma0622@gmail.com

Resumen

Un gobierno efectivo en atender las problemáticas más sentidas de su pueblo gana un gran respaldo popular. Además, logra un prestigio que suele ser valorado en el plano internacional. El amplio apoyo popular con que gobierna el presidente Nayib Bukele en El Salvador ha motivado intensos debates en los países vecinos, respecto de la posibilidad de emular su modelo de seguridad pública. Este artículo reflexiona sobre los elementos conflictivos de gobernar por excepción y sustituir la violencia criminal por violencia institucional, así como la eficacia del carisma para hacer sostenibles los buenos resultados de una gestión gubernamental.

Palabras clave

Carisma, cesarismo, seguridad ciudadana, seguridad pública, combate a maras y pandillas.

Abstract

A government that is effective in addressing the most heartfelt problems of its people gains great popular support. In addition, it achieves a prestige that is often valued internationally. The broad popular support with which President Nayib Bukele governs El Salvador has prompted intense debate in neighboring countries regarding the possibility of emulating his public security model. This article reflects on the conflicting elements of governing by exception and substituting criminal violence for institutional violence, as well as the effectiveness of charisma in making the good results of governmental management sustainable.

Keywords

Charisma, cesarism, citizen security, public security, combating maras and gangs.



Se resaltan los logros en seguridad del gobierno de Bukele, pero se soslayan los fracasos de su política económica y el fiasco de incorporar el Bitcoin como otra unidad monetaria en su economía.

El régimen Bukele en El Salvador ¿modelo a seguir?

Los personajes exitosos en política, las artes o, simplemente aquellos que tienden a ser populares, son sujeto de copia, imitación y son puestos como ejemplo a seguir por quienes aspiran obtener réditos sociales sin mucho esfuerzo y con un elevado nivel de demagogia. Al saber que lo ofrecen como copia barata, sea una pieza de entretenimiento o un proyecto político, tiene una corta duración que, en definitiva, no ofrece soluciones sostenibles, ni intenciones reales de resolver nada. Solo buscan apelar a la emotividad del momento.

Esta tendencia era evidente durante la campaña electoral 2023 en Guatemala. Varios candidatos cínicos y de poco alcance, se limitaron a ofrecer como el centro de sus propuestas la copia de las políticas de Bukele. Estas, si bien han sido efectivas en imponer una tensa calma a la violenta sociedad salvadoreña, corresponde a otra realidad y tiene otras condiciones criminológicas. Los ofrecimientos de emulación se centran en las políticas de seguridad pública, que han dado réditos, credibilidad y legitimidad al presidente Nayib Bukele. Pero se soslayan los fracasos en su política económica y el fiasco del intento de incorporar el Bitcoin como otra unidad monetaria de su economía.

Su declaratoria de guerra a las maras y la estrategia de mano dura contra el fenómeno criminal de mayor incidencia

en la población salvadoreña, le han permitido tener acceso a una cuota de poder excepcional en la institucionalidad del Estado. La efectividad de sus políticas de seguridad pública conduce al éxito de su imagen y al elevadísimo nivel de legitimidad de su mandato.

El principal objetivo del Estado es garantizar la protección del ser humano de las amenazas sociales, promover la convivencia pacífica y garantizar la igualdad ante la ley. Para disuadir y erradicar las conductas delictivas, el Estado ejerce el monopolio legítimo de la violencia mediante los aparatos de seguridad pública. Tiene la potestad de gobernar con medidas excepcionales, cuyo único límite sea la garantía del respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona.

Pero en democracia no se puede mantener permanentemente la excepción como garantía de éxito de las políticas. Limitar la libertad y aplicar el terror de Estado es un oxímoron en las entrañas del sistema político representativo.

La ausencia de información y el silenciamiento de las voces disonantes en una democracia autoritaria generan condiciones para que el pueblo acepte un estado de situación que puede contravenir sus propios derechos, a pesar de gozar de un ambiente de tranquilidad y funcionalidad social.



Nayib Bukele ✓
@nayibbukele

Solicito a la [@AsambleaSV](#) decretar hoy mismo REGIMEN DE EXCEPCION, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República.

Twitter

El Estado en guerra ¿sinónimo de gobernanza cómoda?

Las sociedades del norte de Centroamérica han subsistido en contextos de conflicto, no solo cuando enfrentaron conflictos armados internos, sino más recientemente en contra del crimen organizado y las maras y pandillas que generan lógicas rentistas a partir del fenómeno criminal y las actividades ilícitas. La violencia institucional, criminal o intrafamiliar, es la cotidianidad de estas sociedades sometidas a la dominación por la fuerza que ha llegado a políticas extremas como las de tierra arrasada en las que se aplica la violencia desmedida contra la población civil. El objetivo era eliminar las condiciones de subsistencia de quien ha sido declarado el enemigo interno del Estado. Se vivió esta situación en el periodo de 1982-1983 en Guatemala y lo ahora en El Salvador con la administración Bukele.

En la sociedad salvadoreña post conflicto, se reprodujeron estructuras paralelas criminales que absorbieron a

la juventud y replicaron los modelos de las pandillas norteamericanas, debido al influjo de esta subcultura urbana transferida por migrantes deportados. El impacto de estas estructuras condujo a diferentes gobiernos de El Salvador a negociar con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y la conocida como el Barrio 18. Con estas se han establecido treguas para contener el número de asesinatos violentos que han llegado a reportar 70 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta cifra que se replica en Honduras, los ha ubicado entre los países más violentos del mundo (Valencia, diciembre 2014).

El poder de fuego de las maras en El Salvador no solo eliminaba físicamente a civiles, sino que eran efectivos asesinando policías y militares. Se requirieron negociaciones que impusieron treguas de hasta 15 meses en las cuales las estadísticas se redujeron hasta la mitad de la incidencia homicida. Se presume que incluso la administración Bukele habría negociado y, ante el rompimiento de los acuerdos, en marzo de 2022 se desató una guerra abierta entre el Estado y las maras. Ante esa situación, este presidente recurrió a un régimen de excepción ampliado por más de un

año que, si bien está contemplado en la Constitución, no debe ser el estado normal de la gestión pública.

La postura de guerra entre el Estado y las pandillas (Valencia, noviembre 2014) no es nuevo. Se llegó a legislar un marco normativo que permitiera combatir las maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal —promulgada en 2010—, estableció el marco de tipificación de las estructuras criminales y la extinción de dominio de los bienes y capitales producto de la actividad criminal de los grupos priorizados. Legislar en contra de un enemigo público, fortalece la política criminal de Estado que prioriza las conductas criminales que deben ser combatidas por el poder Ejecutivo y el Organismo Judicial para aplicar la «última ratio», es decir la máxima fuerza del derecho penal para contener los bienes tutelados.

La falta de voluntad política o posiciones tibias de autoridades llevaron a convivir con las maras a gobiernos que fueron señalados de instrumentalizar y funcionalizar a los actores criminales.

Esta era la situación de los primeros dos años del gobierno de Bukele, en los que hubo un descenso constante en los asesinatos perpetrados por las pandillas. La tendencia venía desde 2016 y ciertos estudios refirieron que se debía más a decisión de las pandillas que al éxito de las políticas gubernamentales (Silva, 2023). La tregua con Bukele se rompió por causas desconocidas en marzo de 2022. En un solo fin de semana se reportaron más de 87 asesinatos violentos, lo que desató la guerra contra las maras que estaba contenida en el «Plan de Control Territorial» que era el ofrecimiento de campaña de Nayib Bukele para la presidencia.

Ese plan contempla cinco fases: preparación, oportunidades, modernización, incursión y extracción (Secretaría de Prensa de la Presidencia). Durante su aplicación se han impuesto cercos de seguridad, han construido infraestructura de máxima seguridad para reclusión y se fortalecieron las fuerzas de seguridad pública (policía y ejército) las cuales han sido incrementadas en número de efectivos. Han sido equipadas y dignificadas con beneficios laborales para fortalecer su sentido deontológico fundamental del combate frontal a las pandillas.

El conjunto de acciones y sus resultados han coadyuvado a fortalecer la imagen presidencial y la aceptación de sus políticas y decisiones a pesar de la limitación de los derechos de la población y las posibles arbitrariedades y falta de rigurosidad en la investigación criminal que señala e impone cargos a más de 60 mil presuntos mareros.

El cesarismo como modelo de dominación carismática

Nayib Bukele es el primer *millennial* a nivel global en llegar a la primera magistratura de un país. Es nativo de la sociedad del conocimiento y de las redes sociales virtuales, dominadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Un político de carrera que militó en partidos de derecha e izquierda de su país e hizo carrera política al frente de importantes gobiernos municipales incluida la capital. Además, es un empresario descendiente del sector pudiente del país. Ha basado

su éxito en su política de comunicación y entretenimiento que hace circular a través de sus perfiles de redes sociales virtuales, al punto de dictar ordenes de gestión pública y despedir a sus funcionarios mediante órdenes dictadas por Twitter.

Sus estrategias de propaganda y la majestuosidad en la difusión de sus acciones, proyectos y resultados de sus gestiones —a nivel nacional e internacional—, le ha valido una elevada aprobación popular y un respaldo ciudadano ratificado en las urnas. Lo eligieron presidente y le otorgaron mayoría absoluta en el parlamento, lo cual le permite gobernar con un verticalismo y alineamiento del poder que garantiza el marco jurídico y operativo de su modelo de seguridad pública. La militarización de la seguridad ciudadana es la base del control territorial y la declaratoria continuada del régimen de excepción. Ha perseguido y capturado a gran parte de los integrantes de las maras. Además, promueve una guerra simbólica y cultural contra todo lo relacionado con la subcultura de las pandillas.



2.000 presos, mostrados tras su traslado a la megacárcel de Tecoluca. Getty Images.

Su perfil es el de un General con poder absoluto, capaz de imponer un control férreo a la sociedad desde el aparato burocrático del Estado, el cual administra por delegación directa

en elecciones generales. Le permite someter al enemigo interno (las maras) con una maquinaria militar-policia-administrativa y judicial que impone una legalidad de aplanadora legislativa que

puede llegar a ser cuestionada por los excesos cometidos en el vertiginoso ritmo de la guerra.

Para el éxito de su campaña propagandística ha recurrido al enfrentamiento de los medios masivos de comunicación. Maneja un discurso claro y contundente en contra de los adversarios y oposición política (clases política tradicional de derecha e izquierda). También confronta al empresariado tradicional y hace la criminalización discursiva de los integrantes de las pandillas. Todo esto se traduce en múltiples recursos autoritarios para la organización y gestión del gobierno central hasta la reorganización administrativa del territorio nacional, con miras a ampliar su lucha contra las mafias organizadas, ahora vinculadas a la corrupción en todas sus manifestaciones.

El riesgo de intimidación a sectores sociales de oposición va de la mano con el manejo de información privilegiada, producto de inteligencia de Estado y producida por la maquinaria policiaco-militar para imponer los cercos territoriales a las zonas empobrecidas del país con mayor incidencia criminal.



La mayoría de salvadoreños aceptan la verticalidad del poder y promueven un culto a la personalidad del líder, el presidente Bukele, justificado por la guerra contra las maras.

Todos estos rasgos de su personalidad, del modelo de seguridad que impulsa y la construcción del imaginario colectivo que promueve terminan coincidiendo casi a la perfección con la caracterización que hace Marcos Kaplan (2001) del «cesarismo que combina, en proporciones variables, elementos de autoritarismo, populismo, nacionalismo, chovinismo y militarismo, entrelazados e interdependientes. El poder se personaliza en la figura de un dirigente presuntamente fuerte, providencial y heroico, dotado de aptitudes excepcionales y aceptado en mayor o menor medida como tal». Aceptan la verticalidad de su poder y

promueven un culto a la personalidad del líder, en este caso el presidente, que hace sinónimo de su voz a la voz del pueblo que puede llegar a quedar en situación de marginación y dominio excesivo, justificado por la guerra a las maras.

El carisma en Bukele es avasallador. Su efecto hipnótico trasciende fronteras no solo a los vecinos inmediatos, sino genera admiración en sociedades con democracias sólidas y con mayor profundización que la salvadoreña.

¿Puede el modelo de seguridad de Bukele ser imitado en Guatemala?

La duda parte de múltiples ofrecimientos de campaña electorera de algunos candidatos guatemaltecos que pretendían persuadir a votantes simpatizantes de la figura del presidente salvadoreño, con la oferta de traer al país sus políticas. Afortunadamente, el poco apoyo popular en las urnas, no solo descartó a los candidatos que públicamente hicieron tales ofrecimientos sino evitó el debate ocioso

que conlleva la viabilidad de calcar lo que está funcionando en el vecino país en materia de combate de sus estructuras criminales.



La crítica nacional e internacional a las políticas de Bukele es que no se atienden las causas estructurales de la violencia, consideran que solo hay una sustitución temporal de violencia por otro tipo de violencias institucionalizadas que no modifican la cultura de legalidad en el país.

Sí se puede rescatar, como aprendizaje de lo que vive El Salvador, que para erradicar una amenaza pública se requiere de voluntad política del Estado en todos sus componentes, desde la institucionalidad pública que asume el combate frontal, pasando por la sociedad que respalda la estrategia, hasta las condiciones físicas y materiales que debe tener la burocracia para enfrentar al enemigo público.

Queda para un futuro el debate si el modelo tiene la capacidad de readaptación social de los miles de jóvenes y adultos que han sido criminalizados por sus vínculos y presunta participación en estructuras criminales. Eso debe ser parte de un debido proceso judicial que garantice el derecho de defensa y la presunción de inocencia, pero sobre todo el respeto a sus derechos humanos y su dignidad como personas. En algún momento, la mayoría de los hoy sindicados recuperarán su libertad. Al reinsertarse en la sociedad, se podrá percibir si la acción punitiva del Estado pudo reorientar la conducta de los sentenciados o simplemente trasladó al futuro una violencia agravada por

deseos de venganza de quienes hoy están recluidos autoritariamente, con la venia de la opinión pública.

Por el momento, la crítica de la oposición nacional e internacional a las políticas de Bukele es que no se atienden las causas estructurales de la violencia. Lo único que hay es una sustitución temporal de violencia por otro tipo de violencias institucionalizadas que no modifican la cultura de legalidad en el país.

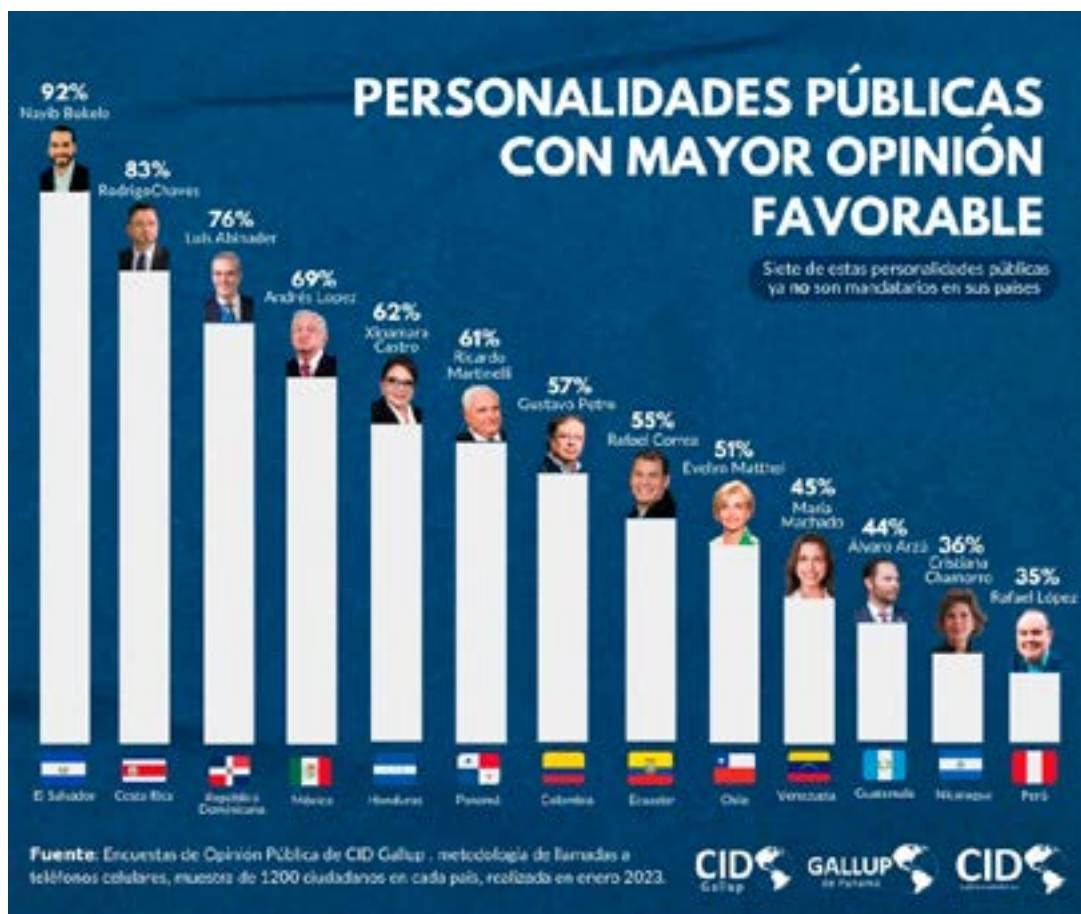
Está claro que, para tener resultados significativos que transformen la percepción de seguridad de una sociedad, se requiere de acciones contundentes sostenidas por un gasto público priorizado en cuerpos de seguridad comprometidos con el bienestar colectivo. Estos deben estar dispuestos a combatir a los principales corruptores de la autoridad pública, desde los criminales los de cuello blanco, pasando por el crimen organizado hasta llegar a los actores privados que buscan un trato privilegiado en lo público.

Guatemala afronta fenómenos de criminalidad compleja y variada que han

ido destruyendo la credibilidad de los cuerpos de seguridad desde sus raíces. Un combate frontal no solo requiere la persecución policial, judicial, mediática y cultural. Es fundamental reforzar la estructura axiológica de la sociedad que rechace toda actividad ilegal.

¿Puede haber un cesarismo progresista? Antonio Gramsci plantea que éste se sustenta en la personalidad heroica

de un líder comprometido con el uso legítimo de la violencia, para procurar el bien común tutelado por una burocracia efectiva en tal cometido. Es muy pronto afirmar que en El Salvador hacen lo correcto de forma sostenible. Lo que queda claro es que todo pueblo valora a un Estado que cumple con sus funciones más básicas, empezando por garantizar la seguridad.



<https://twitter.com/cidgallup/status/1630729599289024512/photo/1>

Referencias bibliográficas

Kaplan, Marcos. 2001. ¿Hacia un Neo-cesarismo? Universidad Nacional Autónoma de México. Revista de la Universidad de México, No. 600-601.

Secretaría de Prensa de la Presidencia, 3 de diciembre de 2022. Presidente Nayib Bukele anuncia que la fase 5 del Plan Control Territorial inicia en el municipio de Soyapango. Disponible en <https://www.presidencia.gob.sv/presidente-nayib-bukele-anuncia-que-la-fase-5-del-plan-control-territorial-inicia-en-el-municipio-de-soyapango/#:~:text=La%20fase%205%20del%20PCT,%2C%20Oportunidades%2C%20Modernizaci%C3%B3n%20e%20Incursi%C3%B3n>.

Silva Ávalos, Héctor, 22 de febrero de 2023. Regímenes de excepción: ¿El nuevo modelo de seguridad en Centroamérica? Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Disponible en <https://www.wola.org/es/analisis/regimenes-de-excepcion-nuevo-modelo-seguridad-centroamerica/>

Valencia, Roberto, 17 de noviembre de 2014. El Salvador: "Hay una actitud de guerra entre el Estado y las pandillas". BBC News Mundo. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141112_el_salvador_mijango_tregua_crz

Valencia, Roberto, 29 de diciembre de 2014. Los 3,800 asesinatos que tienen en alerta a El Salvador. BBC News Mundo. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141222_america_latina_salvador_mara_pandillas_18_amv